

## **La gran oportunidad**

### **Dr. Horacio Cao**

Doctor en Administración, Administrador Gubernamental, Investigador del CIAP – Facultad de Ciencias Económicas - Universidad de Buenos Aires

La movilización popular que derrotó un sistema político que había condicionado durante casi cincuenta años la vida provincial, seguida por la exitosa transición de la Intervención Federal, abre la oportunidad de reinventar el Estado y la organización social de Santiago del Estero.

Pero la coyuntura favorable al cambio no debe hacernos perder de vista las dificultades que deben enfrentarse. En este aspecto, el primer condicionante estructural está dado por la fragilidad y heterogeneidad de la sociedad santiagueña, una de las provincias que cuenta con mayor proporción de población pobre del país.

Citemos, casi al azar, una de las tantas cifras que ejemplifican esta situación: mientras que en el total nacional, casi el 90% de los habitantes tiene acceso a agua de red, en varios departamentos la proporción de población que accede a este servicio es inferior al 20% y llega hasta un increíble 10% en Figueroa; si, sólo uno de cada diez habitantes de este departamento accede a agua segura (Datos del Censo 2001).

Pero no sólo debe tomarse en cuenta la alta incidencia relativa de la población pobre, también debe considerarse que dentro de este segmento, un alto porcentaje corresponde a la población rural. Esta situación es una originalidad en el marco nacional: en ninguna otra provincia existe un campesinado numéricamente tan importante que, adicionalmente, tiene problemas de posesión de tierra. A diferencia de lo que ocurre en el resto de América Latina, nuestro país no tiene experiencia ni tiene instituciones como para enfrentar el problema.

Más allá de ser el principal punto a tratar – es imposible edificar algo parecido a un gobierno democrático cuando más de la mitad de la población no tiene aseguradas condiciones de subsistencia - lidiar con la alta proporción de habitantes pobres no es el único reto que enfrenta el gobierno. Como en el resto del país, junto al océano de pobreza, y muchas veces en tensión con sus intereses y visión del mundo, existe una influyente clase media cuya conformación esta vinculada más con las expectativas de vida y la formación alcanzada que con el nivel de ingreso.

El segmento medio, que está localizado preponderantemente en el Departamento Capital, tiene una importante capacidad para hacerse oír y, puede decirse, es determinante en la formación de la opinión pública.

La llamada globalización ha hecho que esta clase media - sobre todo en el caso de los más jóvenes - muestre gustos, perspectivas y valores mucho más cercanos a sus equivalentes de otras ciudades del mundo que a los del resto de sus comprovincianos. Desde esta condición, pide que el Estado desarrolle servicios de calidad para alcanzar el pleno goce de los derechos de segunda generación (calidad del trabajo, salud, educación, cultura) y de tercera generación (derecho a decidir sobre los recursos de la comunidad, derecho a la información y a la comunicación, derecho a un medio ambiente sano y equilibrado).

También existe una clase alta regional, casi toda sobreviviente del desfavorable contexto de las últimas décadas a partir de una articulación parasitaria con el sector

1

público. Por diferentes razones históricas que no tenemos espacio para tratar aquí, este sector no ha logrado convertirse en una burguesía provincial, esto es, no ha construido la red de poder político, tecnología, capacidad productiva y capital necesario como para insertarse dinámica y autónomamente en el mercado nacional (ni que hablar de los mercados externos). Quienes si tienen esta capacidad son agentes económicos internacionalizados, que casi no se articulan con la política y el resto del aparato productivo santiaguense.

Uno podría decir que estos tres sectores puján por la orientación de las políticas de Estado; esquemáticamente, por la garantía de condiciones mínimas de subsistencia – los sectores de más bajos ingresos - por derechos de segunda y tercera generación – la clase media - y por acciones de fomento económico, los sectores altos. Pero en la realidad, esta situación se mixtura y multiplica a partir de clivajes sectoriales, ideológicos, partidarios, culturales, etc. También por una extendida cultura del favor que está inserta en todos los estratos y que hace que se pida de las autoridades políticas acciones para resolver “mi” problema (el de mi familia, el de mi emprendimiento productivo, el de mi trabajo) y no políticas públicas para superar los problemas de la sociedad.

En este escenario cobra importancia el papel de la esfera política como espacio en donde construir un espacio de lo público, en donde se vayan recreando los distintos “nosotros” de una sociedad plural que reemplacen los atomizados “mi”, y que luego traduzca las inevitables tensiones entre ellos en un proyecto político a ser desplegado por el Estado. Se trata de un complejo proceso de construcción a través de opciones difíciles y problemáticas, que implican conflicto y deliberación para hallar consensos. En este marco, la democracia es, más que nunca, una arena para el reconocimiento y tratamiento civilizado e institucional de las contradicciones.

La tarea es sin duda ardua, pero hay ciertas variables que permiten ser optimistas. En particular, es notoria la diferencia con respecto a lo que ocurría durante los '90, cuando el contexto nacional impulsaba a los gobiernos a desarrollar lo que se conocía como “ajuste estructural”, lo que elevaba de forma exponencial la conflictividad provincial. El recordado “Santiagoñazo” exime de abundar en el tema.

El nuevo ciclo económico y político que se inicia en el país con los sucesos de diciembre del 2001, presenta condiciones macroeconómicas mucho más amigables para la producción regional. Adicionalmente, el entorno financiero fiscal, tan importante en una provincia en donde la Administración Pública es crucial para el funcionamiento de toda la sociedad, hoy es favorable y, además, permite esperar generosas ayudas del gobierno nacional para llevar adelante obras de infraestructura y para comenzar a enmendar la terrible situación social.

Pero no sólo desde la economía y el ámbito fiscal hay señales esperanzadoras. La normalización democrática llevada adelante por la intervención federal terminó con la subordinación institucional al personalismo y la persecución a opositores. En aquel momento toda acción política tenía el imperativo ético de subordinarse a la denuncia de un régimen violador de los derechos humanos. En la nueva etapa, es posible pensar en

---

<sup>1</sup> El punto es desarrollado en “Santiago del Estero, del oprobio a la esperanza” Oscar Gerez, Raúl Dargoltz y Horacio Cao, de próxima edición.

un juego político cualitativamente distinto, en donde la oposición no sólo ocupe un lugar en el ámbito agonal – el de la lucha política – sino también en la faz arquitectónica – el ámbito de la construcción de la nueva sociedad.

Las compuertas que por décadas cerraron el paso al desarrollo santiagueño parecen haberse entreabierto y dejan ver un estrecho pasadizo hacia un destino diferente. Toda la sociedad, y por supuesto el gobierno en primer lugar, tienen el tremendo desafío de encontrar la manera de franquearlo, sino la historia les reclamará haber dejado pasar esta gran oportunidad.

[PDF to Word](#)